



## **PROYECTO DE DECLARACIÓN**

### **La Honorable Cámara de Diputados de la Nación**

#### **Declara:**

Expresar el más firme REPUDIO a la falta de resolución al conflicto educativo que lleva adelante la Gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

La baja calidad de gestión de la gobernadora, junto a la representación sindical docente, provocan un perjuicio irreparable a los estudiantes de Santa Cruz, al no recibir el servicio de educación durante tres años, impidiendo el acceso al DERECHO A UNA EDUCACION DE CALIDAD.

Álvaro de Lamadrid  
Diputado de la Nación



## **Fundamentos**

Sr. Presidente:

Desde hace tres años el Estado provincial en Santa Cruz no presta el servicio educativo a los niños, declinando así un deber indelegable, básico en todas las democracias modernas.

En la tierra de los Kirchner, la educación no es un valor a defender.

Un grupo de padres se auto convocó en El Calafate, Santa Cruz, para exigir el regreso de las clases presenciales. Primero se reunieron frente a la Gobernación y luego se trasladaron hacia la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Durante 2020, los estudiantes santacruceños hicieron todo el ciclo lectivo en forma virtual. En el comienzo de 2021, todo se mantiene tal cual transcurrió el año pasado.

Tan solo un puñado de alumnos que representa el 10% de la matrícula provincial pudo retornar a las aulas. En cambio, para las localidades más pobladas, aquellas que cuentan con transmisión comunitaria de Covid-19, las clases siguen de modo virtual.



Además de El Calafate, el cierre que dispuso la gobernadora alcanza a Río Gallegos, Caleta Olivia, Río Turbio, Pico Truncado, Perito Moreno, Puerto Deseado y Las Heras. Solo las escuelas rurales de la provincia pudieron retomar el contacto presencial con sus alumnos. Desde la cartera educativa, precisaron que en aquellas localidades que presentan un "brote local" la asistencia es de al menos dos veces por semana, mientras que las ciudades que tienen transmisión por conglomerado pueden ir tan solo un día. En todos los casos, la asistencia es por grupos reducidos.

Sin embargo, el 1 de marzo las clases volvieron a iniciar en forma virtual. Desde entonces, el reclamo de "Abran las escuelas" se multiplicó en la provincia, principalmente en El Calafate donde el grupo de padres auto convocados gana volumen a medida que persiste el cierre educativo.

**El Calafate está abierto al turismo, clubes, colonias, academias de idiomas, bares, inclusive el casino. Todo menos las escuelas.**

Los padres apelaron a distintas vías de reclamos: enviaron varias cartas a la gobernación y a los principales funcionarios provinciales, llevaron adelante una clase pública, organizaron cacerolazos. Del otro lado, nunca obtuvieron respuesta.

La gobernadora hizo caso omiso a los pedidos de apertura y en la primera



sesión del año en la Cámara de Diputados bloqueó el proyecto que presentó un legislador que responde a Belloni (Agrupación Kirchnerista). El proyecto terminó archivado.

El conflicto docente en Santa Cruz no es nuevo, las clases iniciaron con paro el día 1 y 2 de marzo, pero con un ciclo lectivo virtual. Esto es un chiste, argumentan los padres auto convocados, ya que hay muy poca conexión de internet y pocos alumnos tienen acceso a las computadoras.

Como ya es costumbre en Santa Cruz, el ciclo lectivo -en este caso virtual- comenzó con un paro docente lanzado por Adosac, el principal gremio del sector que está dentro de Ctera. Ante la falta de un acuerdo salarial, las escuelas públicas de la provincia todavía no empezaron.

En los últimos años es una constante en Santa Cruz. 2017 fue el año más traumático en ese sentido: las escuelas estuvieron cerradas durante más de 100 días por las sucesivas huelgas docentes. En los años posteriores, los paros también imposibilitaron el desarrollo regular del ciclo lectivo.

Durante la pandemia esto quedó mucho más evidente. Miles de niños no tuvieron la posibilidad de conectarse a sus clases virtuales por no contar con los elementos electrónicos necesarios, no contar con internet en sus hogares y miles de otros ni siquiera con una vivienda digna en donde sentarse a estudiar.



El olvido por parte del Estado con respecto a los sectores más vulnerables de la sociedad evidenció que los gobiernos de turno, lejos de facilitar los elementos necesarios a docentes y alumnos para permanecer en sus hogares y desde allí realizar sus actividades, prefiere exponerlos mediante protocolos mal pensados y que se alejan a las realidades de las aulas, abrir escuelas en malas condiciones y mantener salarios por debajo de la línea de la pobreza.

A comienzos de este año 2021, la presidenta del Consejo Provincial de Educación Cecilia Velázquez dijo en conferencia de prensa que la presencialidad en las escuelas dependía de la vacunación a los docentes de Santa Cruz.

La discusión de “presencialidad si, presencialidad no” seguirá colmando las pantallas, pero el problema de raíz seguirá siendo el mismo, la prevalencia de un sistema desigual que sigue sin tener en cuenta el creciente empobrecimiento en las familias trabajadoras de la provincia de Santa Cruz.

Unicef recomienda; es fundamental priorizar los esfuerzos para regresar a la educación presencial en las mejores condiciones posibles de seguridad en todas las escuelas del país. En caso de necesidad de confinamiento, UNICEF recomienda que las escuelas sean lo último en cerrar y lo primero en abrir cuando las autoridades comiencen a suprimir las restricciones.

El impacto del cierre de las escuelas ha sido devastador a nivel mundial,



afectando los aprendizajes, la protección y el bienestar de niños, niñas y adolescentes. La evidencia muestra que son los chicos los más vulnerables, y quienes sufren las peores consecuencias.

La escuela, más allá de su función primaria en el aprendizaje, tiene un rol central en el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes.

La información más reciente disponible a nivel mundial indica que, con las medidas de seguridad necesarias, las escuelas no son el principal factor de transmisión en la comunidad.

Mientras continúan surgiendo evidencias con respecto a los efectos de la educación presencial sobre el riesgo de infecciones por COVID-19, una revisión de la evidencia actual muestra que la educación presencial no parece ser el principal promotor de los incrementos de la infección, los estudiantes no parecen estar expuestos a mayores riesgos de infección en comparación con el hecho de no asistir a la escuela cuando se aplican medidas de mitigación, y el personal escolar tampoco parece estar expuesto a mayores riesgos relativos en comparación con la población general.

Por estos motivos, cerrar las escuelas debe ser una medida de último recurso que solo deberá tenerse en cuenta tras haber considerado todas las opciones disponibles.



En este sentido, es preciso garantizar que los niños y niñas que están en peligro de ser víctimas de violencia en sus hogares, que dependen de los servicios de alimentación escolar y cuyos progenitores son trabajadores esenciales puedan continuar su educación en la escuela.

El derecho a la educación de los niños argentinos debe trascender las diferencias políticas y unificar a una sociedad golpeada por la pandemia, y por el impacto económico, social y emocional que trajo el COVID-19.

Sin embargo, la situación relevada en el país indica que menos de la mitad de los hogares cuenta con acceso fijo a Internet de buena calidad en la señal , y, 1 de cada 2 , no cuenta con una computadora disponible para usos educativos.

Según datos oficiales, cerca de un millón de chicos y chicas matriculados en marzo de 2020 en algún nivel de la educación obligatoria ha mantenido bajo o nulo intercambio con su escuela, lo que coloca en severo riesgo su continuidad escolar.

UNICEF insta a que en 2021 la educación presencial sea la regla, siempre que la situación epidemiológica lo permita, con un acuerdo político y social que evite profundizar las brechas de desigualdad de los niños, niñas y adolescentes, y posibilite garantizar su bienestar.

El sistema educativo en Santa Cruz se encuentra en agonía: las instituciones,



en total abandono; los docentes, bajo la línea de pobreza y los alumnos, en absoluto estado de vulnerabilidad.

La educación no es una política de Estado para quienes gobiernan la provincia desde hace treinta años, por el contrario, resulta ser el último eslabón de la cadena. Esto quedó evidenciado en la última paritaria, donde el Gobierno santacruceño lo único que propuso fue unificar los salarios que ellos mismos desdoblaron tiempo atrás, ofreciendo un incremento salarial del 0% al sector docente, que, junto a los jubilados, resulta ser uno de los más castigados.

Pareciera que para las autoridades del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz la no repitencia es síntoma de inclusividad e igualdad. Nada explica mejor esta situación que las palabras del escritor y filósofo Santiago Kovadloff: "Promover la inclusión escolar a costa de la identidad educativa es un contrasentido. Una irresponsabilidad moral. Nuestros niños y jóvenes quedan expuestos a un porvenir desolador".

Pero no solo se creó este perverso esquema educativo, sino que, además, y para agravar el cuadro, se lo hizo sobre la base de infraestructuras escolares en paupérrimo estado, de escaso o inexistente presupuesto, sostenidas por padres con buena voluntad, cooperadoras y ONG.

La situación educativa ha llevado a centenares de chicos a migrar y escolarizarse en provincias vecinas, produciendo en Santa Cruz una



importante baja de matrículas, el cierre de secciones y dejando muchos docentes sin trabajo, que se vieron obligados a abandonar la provincia.

Esta educación en estado agónico requiere de un urgente tratamiento. Necesitamos cambiar el modelo e impulsar una revolución que lleve al fortalecimiento de las instituciones educativas. La escuela va más allá de los contenidos que se pueden aprender, debemos entenderla como el centro de la comunidad, imprescindible para el desarrollo y el crecimiento de cualquier sociedad, y por ello nos urge invertir mucho para mejorarla.

Cuando hablamos de la necesidad de transformar Santa Cruz, nos referimos a llevar adelante una reformulación de base en las políticas de Estado, priorizando generar el ámbito propicio para la educación del futuro, con mejores contenidos, metodologías e infraestructura adecuada que potencie a nuestros niños y jóvenes a un mundo cada vez más atractivo y desafiante.

Mientras se discute la vuelta presencial a las escuelas, un informe difundido sobre la educación en Santa Cruz muestra que en esa provincia el cierre por la pandemia agravó una situación estructural crítica.

Los alumnos que terminaron la primaria el año pasado fueron a la escuela solamente cuatro años de los siete de escolaridad, mientras que los que egresaron de la secundaria estuvieron en las aulas solamente dos años y tres meses.



Los datos surgen de un estudio realizado por Gabriel Ruiz, abogado y docente universitario, magister en Filosofía del Derecho y especialista en Derecho a la Educación.

El informe realizado por Ruiz (con datos propios ya que la provincia no brinda datos oficiales) analizó cuántos días de clases deberían haber tenido los egresados 2020 (que comenzaron respectivamente en 2014 la primaria y en 2016 la secundaria) y cuántos efectivamente tuvieron.

Así, revela que entre 2014 y 2020 --todos años gobernados por el kirchnerismo, los dos primeros con Daniel Peralta como gobernador y el resto de Alicia Kirchner, los alumnos de las escuelas primarias fueron a clase 723 días sobre un total de 1.260. Y los de la secundaria concurren 407 sobre 900. Los peores años fueron 2017 y 2018. En el primero, sobre 180 días del calendario hubo sólo 63 con chicos en las aulas. Y en 2018, 102.

Pero los estadísticos no fueron los únicos datos preocupantes que se dieron a conocer: Ruiz le dijo a Clarín que "hay madres, familias enteras que lamentablemente tuvieron que separarse de sus hijos porque los han enviado a otras provincias donde tienen posibilidades de estudiar. Esto ocurrió sobre todo en 2017".

En el estudio que realizó, no están contemplados todos los paros que se



realizaron. Porque no solo se suspendían clases por las huelgas del gremio docente. También paraba personal afiliado a ATE o se suspendían clases por falta de agua, falta de gas, desinfección, huelga de no docentes o cursos de capacitación. Así que las cifras de días perdidos pueden aumentar", agregó Ruiz.

Otro dato significativo es el alto promedio de deserción escolar. María Laura Centurión, contadora pública y docente en una escuela secundaria de El Calafate, explicó a este diario que "en la escuela secundaria donde da clases hay 8 cursos de primer año. Se inscriben anualmente alrededor de 300 alumnos. Y solo 60 egresan. Y sumado a eso, de esos 60 son muy pocos los que se van con el título en la mano. Se van sin haber completado sus estudios ni sus espacios curriculares debido a los pocos días de clases que tuvieron un porcentaje de los años de escolaridad".

Según Ruiz, "en la secundaria, desde que asumió Alicia Kirchner, los chicos fueron 2 años y 3 meses a la escuela. Aun contando el 2020 con la pandemia, si supuestamente se hubiera completado el ciclo lo habrían hecho 3 años y 3 meses. Esta circunstancia implica un daño social y estructural a toda una generación".

"Estos chicos van a poder tener trabajos precarios nada más. Va a ser un porcentaje mínimo el que realmente pueda sortear esta dificultad de no haber tenido educación. Están destinados a tener enormes dificultades para poder



acceder a una educación superior de calidad. Y eso les va a impedir mañana tener trabajos calificados. Acá lo que ha pasado en Santa Cruz es un corte generacional. Donde hay una generación de chicos que tienen serias posibilidades de comprensión y serias posibilidades de no acceder a los niveles universitarios".

La crisis educativa es mucho más grave que la peor de las pandemias. Excluye y niega oportunidades de futuro a los niños y niñas santacruceñas.

Lo único que les queda es el empleo público. Entonces los hacen militantes y se convierten en parte del clientelismo político.

Ruiz cuestionó el programa Conectar Igualdad: "Fue un asistencialismo que no tuvo respaldo ni en la capacitación ni en la tecnología. ¿De qué sirve que los chicos tengan computadoras si no tienen acceso a Internet?".

SANTA CRUZ nos muestra la realidad que la democracia argentina debe evitar.

La falta de educación, es una POLITICA PUBLICA del Kirchnerismo, lo practica en Santa Cruz desde hace 30 años.

Argentina este año debatirá en las elecciones legislativa qué valores se defenderán, EDUCACION DE CALIDAD para evitar los futuros esclavos del



*H. Cámara de Diputados de la Nación*

*"2020 - Año del General Manuel Belgrano"*

régimen.

Álvaro de Lamadrid  
Diputado de la Nación